



HAL
open science

1982: El fin de la transición democrática en Bolivia

Sebastian Urioste Guglielmone

► **To cite this version:**

Sebastian Urioste Guglielmone. 1982: El fin de la transición democrática en Bolivia. Les Études du CERI, 2023, América latina. El año político 2022, n° 264-265, pp.36-39. hal-03968441

HAL Id: hal-03968441

<https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-03968441>

Submitted on 1 Feb 2023

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

1982: El fin de la transición democrática en Bolivia

Sebastián Urioste

La elección del presidente Hernán Siles Zuazo en octubre de 1982 puso fin a una larga y tortuosa transición democrática en Bolivia iniciada en 1978. Sin embargo, una importante crisis social y política hizo tambalear la presidencia y provocó el fin del nacionalismo económico inaugurado treinta años antes.

Antecedentes

En 1952, con la ayuda de los carabineros y gracias a la intervención de los trabajadores y mineros, un golpe de Estado organizado por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (M.N.R.) contra un gobierno militar se convirtió en la llamada "Revolución Nacional", uno de cuyos pilares fue la nacionalización de las minas de estaño. El M.N.R se convirtió en un "partido-estado" y estuvo plagado de luchas intestinas, especialmente entre Víctor Paz Estenssoro y Hernán Siles Zuazo, dos presidentes que se alternaron en el poder. Desafiado por sus aliados plebeyos, el M.N.R. reorganizó el ejército para contrarrestar las milicias populares armadas. Fue un error, puesto que en 1964, el general Barrientos, recién elegido vicepresidente junto a Víctor Paz Estenssoro, encabezó un golpe de Estado que, en un principio, contó con el apoyo de gran parte de la población y de los sindicatos, en particular de la poderosa Central Obrera Boliviana (C.O.B.) que había "cogobernado" con el M.N.R.

Esta oportunidad para el regreso de los militares desató una competencia dentro de las fuerzas armadas para dirigir el Estado hasta 1982, cuando éstas renunciaron a la disputa por el poder político y la administración de las empresas públicas que habían mantenido con los sindicatos durante 18 años. Mientras tanto, entre intentos de levantamientos populares, huelgas generales, golpes y contragolpes militares, muchos presidentes que habían llegado al poder a través de las urnas y el parlamento o que habían sido nombrados por los cuarteles se vieron obligados a dimitir o incluso fueron depuestos por la fuerza. Esta inestabilidad no hizo más que acrecentarse cuando se inició la transición a la democracia tras las huelgas de hambre de 1978.¹ Así, las elecciones de junio de 1980 no dieron ninguna mayoría absoluta en las urnas ni una mayoría en el Parlamento, sino que dieron una ventaja a la coalición liderada por Hernán Siles Zuazo (jefe del M.N.R. de Izquierda) y Jaime Paz Zamora (del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, M.I.R.). Estos resultados condujeron al sangriento golpe de Estado de García Meza, que luego entregó el poder a una Junta militar en agosto de 1981. El 17 de septiembre de 1982, la C.O.B. logró organizar una manifestación de decenas de miles de personas en La Paz, exigiendo el fin de los gobiernos militares y la instalación del Congreso de 1980. Este congreso fue convocado formalmente el 5 de octubre de 1982. Votó por Hernán Siles Zuazo y Jaime Paz Zamora, de la coalición Unidad Democrática Popular (U.D.P.), para ser, respectivamente, presidente y vicepresidente. La transición democrática acababa de completarse,

¹ S. Urioste, « La transición de 1978 en Bolivia » in O. Dabène (dir.), *América latina. El año político 2018/Les Etudes du CERI*, n° 239-240, enero 2019 (www.sciencespo.fr/ceri/fr/papier/etude).

pero abrió la puerta a la inestabilidad social y gubernamental y finalmente provocó el fin del ciclo del nacionalismo económico y de la influencia de los sindicatos de trabajadores.

El gobierno de la Unidad Democrática Popular

Se pueden proponer varias explicaciones para tratar de describir las profundas turbulencias de los años de gobierno – o "desgobierno", como se denominó entonces – de la U.D.P entre octubre de 1982 y agosto de 1985. Una de ellas señala que la imposibilidad de legitimar un gobierno militar por el mero uso de la fuerza y sin apoyo social no se resolvió con una transición democrática basada en un pacto entre las élites, como en otros países latinoamericanos; sino que, por el contrario, la transición se habría logrado través de la presión social y sindical, como fue el caso de las huelgas de septiembre de 1982.²

De hecho, según la C.O.B., el "proceso democrático" resultante de la resistencia a la "dictadura y al fascismo" fue "obra" de los "trabajadores".³ Por ello, la "oposición concertada" de la central sindical se convirtió en una abierta estrategia de desestabilización, ya que encontró poca respuesta a sus reivindicaciones y los partidos parlamentarios empezaban a desplazarla del campo político. Uno de los episodios más llamativos del progresivo deterioro de las relaciones entre la UDP y la C.O.B. fue cuando, en abril de 1983, esta última ocupó la principal empresa minera estatal para imponer el "control obrero mayoritario", es decir, la mayoría de sus delegados en el consejo de administración. Mientras tanto, la central había exigido, sin éxito, la adopción de su "Plan de Emergencia Económica y Social", elaborado desde la perspectiva de la lucha de clases, como condición para su participación "mayoritaria" en el gobierno. También se planteó el control interno de las empresas privadas por parte de sus empleados. La ruptura definitiva se produjo en mayo de 1984, después de que el VI Congreso de la C.O.B. exigiera, en el plano económico, la introducción de un salario mínimo que debía aumentar automática y proporcionalmente en función de la subida de los precios, y, en el plano político, la formación de un "gobierno revolucionario" que debía "cambiar el contenido de clase del Estado".⁴ Tan solo en términos económicos, estas exigencias estaban en total desacuerdo con las medidas antiinflacionistas aplicadas por el gobierno, que tenía que intentar controlar la pérdida de volumen y valor de las exportaciones de minerales y el pago de la deuda externa.

La ruptura del gobierno de Hernán Siles Zuazo fue otro de los momentos álgidos de este periodo. En minoría en el Parlamento, donde fueron constantemente desafiados por el M.N.R. "histórico" de Víctor Paz y la Acción Democrática Nacionalista (A.D.N) del exdictador Hugo Banzer Suárez, los ministros de la coalición del M.N.R. de Izquierda y del M.I.R. mostraron abiertamente sus profundos desacuerdos. Incluso sucedió que Jaime Paz Zamora, a pesar de ser vicepresidente de la República, retirara a su partido del gabinete. La contrapartida de esta descomposición fue la pérdida de consenso que siguió a las medidas económicas

² J. Lazarte, *Entre los espectros del pasado y las incertidumbres del futuro: política y democracia en Bolivia a principios del siglo XXI*, La Paz, Friedrich Ebert Stiftung, 2005, p. 12.

³ W. Delgadillo T., *Informe del CEN de la COB: en la gestión 1984-1987*, Santa Cruz, COB, 1987, p. 7.

⁴ J. Lazarte, *op. cit.*, pp. 35-36.

aparentemente destinadas a frenar la inflación: en 1984, cuando los precios subieron un 2177%, las huelgas aumentaron un 192% respecto al año anterior, la mayoría de ellas de carácter salarial y procedentes de las clases medias. La inestabilidad del gobierno impidió el uso de la fuerza pública en la mayoría de los conflictos sociales.⁵

Un ciclo termina

En este contexto, el 24 de noviembre de 1984, una mediación encabezada por la Iglesia católica condujo a la decisión de los principales partidos parlamentarios y del gobierno de acortar el mandato presidencial de Siles en un año y convocar nuevas elecciones, presidenciales y legislativas.

La C.O.B. interpretó este acuerdo como una "capitulación" de la U.D.P. para proteger los intereses de los trabajadores a cambio de su "estabilidad"; además, "con la intervención de la Iglesia, el gobierno de la U.D.P. y la derecha" habían "acordado despojar la reconquista democrática de todo contenido popular" atándola a "formalismos constitucionales".⁶ Ante esta perspectiva, el 22 de enero de 1985, el Comité Ejecutivo de la central sindical exigió la creación de un "instrumento político capaz de dirigir la lucha más allá de los márgenes defensivos de la protección salarial".⁷ Cuando en febrero de ese mismo año el gobierno de Siles Zuazo decretó un nuevo "paquete económico", los sindicatos mineros convocaron una gran manifestación en La Paz el 4 de marzo, que estuvo salpicada de explosiones de dinamita en las calles. Al día siguiente, los dirigentes de la C.O.B. declararon que el problema ya no era sólo salarial, sino también político, y que debía concluir con la dimisión del presidente y la instauración de un gobierno obrero. Con respecto a las próximas elecciones, la central sindical afirmó que los partidos de derecha aplicarían los planes del Fondo Monetario Internacional.⁸ Por su parte, el gobierno calificó estas movilizaciones como "subversión" y denunció un "plan terrorista coincidente con la huelga",⁹ mas unos días después reiteró la oferta de cogobernar con la C.O.B.

Esta propuesta fue rechazada por la central obrera, que renovó su llamamiento para "iniciar la estructuración de un instrumento político alternativo del pueblo".¹⁰ Algunos dirigentes incluso invitaron a los "oficiales y soldados del Ejército y la Policía a unirse a la lucha para evitar la regresión y el fascismo".¹¹ Esta invitación llevó al presidente Siles Zuazo a ordenar el "control militar" del territorio, es decir, a desplegar tropas y vehículos militares en las calles de las capitales de departamento. El Alto Mando de las Fuerzas Armadas explicó que el objetivo era evitar al "pueblo" las consecuencias de la "intransigencia de los extremistas incrustados en el movimiento obrero, que, obedeciendo órdenes extranjeras" ponían en peligro "los más elementales derechos humanos" y la "paz pública", alterando la "normalidad

⁵ *Ibid.*, pp. 33 y 49.

⁶ W. Delgadillo T., *op. cit.*, pp. 21-23.

⁷ *Ibid.*, p. 25.

⁸ *Presencia*, 5 de marzo de 1985.

⁹ *Presencia*, 8 de marzo de 1985.

¹⁰ *Presencia*, 19 de marzo de 1985.

¹¹ *Presencia*, 20 de marzo de 1985.

de las actividades" y atacando las "instituciones fundamentales del Estado"; por lo que era necesario "restablecer las garantías constitucionales" que preservaran la "seguridad de las personas, los bienes y los servicios, tanto públicos como privados".¹² Por su parte, el ministro del Interior aclaró que la "movilización militar" no implicaba la detención de personas y que esta medida difícilmente podía compararse con las acciones de las dictaduras, ya que se trataba de "proteger la democracia y garantizar que la fuente de soberanía, el pueblo, se expresara en las urnas".¹³

Este despliegue militar obligó a la C.O.B. a poner fin a una de las huelgas generales más largas de la historia de Bolivia, sin que se atendieran sus principales reivindicaciones. Las "Jornadas de marzo" de 1985 y el gobierno de la U.D.P. en general se convertirían en referencias negativas en los años siguientes. En cuanto al mantenimiento del orden, las justificaciones del "control militar" prefiguraron algunas de las formulaciones de los futuros estados de sitio establecidos por los gobiernos posteriores con el fin de reprimir las movilizaciones sindicales. Gobiernos que, a partir de 1985, se basarían en coaliciones de partidos políticos en el parlamento y emprenderían la privatización de las empresas públicas, entre ellas, las empresas mineras, y la liberalización del mercado laboral a medida que los sindicatos tradicionales fueron declinando. Se inició un nuevo ciclo que no terminaría hasta octubre de 2003, cuando las movilizaciones sociales alternativas a la C.O.B. y en contra de un "modelo neoliberal" condujeron a la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, constituyendo así un preámbulo para el retorno al nacionalismo económico bajo el gobierno de Evo Morales.

¹² *Presencia*, 21 de marzo de 1985.

¹³ *Ibid.*

Para citar este capítulo: Sebastián Urioste, « 1982: El fin de la transición democrática en Bolivia », in O. Dabène (dir.), *América latina. El año político 2022/Les Etudes du CERI*, n° 264-265, Enero 2023 [en línea: www.sciencespo.fr/ceri/fr/papier/etude].